

Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO ®

Buga – Valle del Cauca

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Mónica Yulieth Perea Salázar y Otros

Demandado: Nación – Rama Judicial- Consejo Superior de la
Judicatura y Nación – Fiscalía General de la Nación

JULIANA ÁLVAREZ MUÑOZ, mayor de edad y vecina de Buenaventura, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.948.710 de Armenia – Quindío, abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 189.178 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me han conferido los señores **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR**, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.894.614 de El Dovio – Valle del Cauca, quien actúa en su propio y en representación de los menores **JOHAN CAMILIO PEREA PEREA y SHARON MANUELA MONTOYA PEREA (Hijos)**, **GERMÁN QUINTERO ARCILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.229.670 de Zarzal – Valle del Cauca (Compañero), **ALEIDA MARÍA SALÁZAR JURADO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.891.347 de El Dovio – Valle del Cauca (Madre), **MIGUEL FERNANDO PEREA SALÁZAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.932.078 de El Dovio – Valle del Cauca (Hermano), **ROBERTH ANDRÉS PEREA SALÁZAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.193.939 de El Dovio – Valle del Cauca (Hermano), quien actúa en su propio nombre y en representación del menor **PABLO ANDRÉS PEREA CHOCUE (Sobrino)** y **ALBA MARINELA SALÁZAR**, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.538.822 de Jamundí – Valle del Cauca (Tía), por medio del presente escrito acudo a usted con el fin de instaurar medio de control de Reparación Directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

DECLARACIONES Y CONDENAS

Primero. DECLARAR que la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación, son responsables administrativamente por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales o inmateriales causados a los señores **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR, JOHAN CAMILIO PEREA PEREA, SHARON MANUELA MONTOYA PEREA, GERMÁN QUINTERO ARCILA, ALEIDA MARÍA SALÁZAR JURADO, MIGUEL FERNANDO PEREA SALÁZAR, ROBERTH ANDRÉS PEREA SALÁZAR, PABLO ANDRÉS PEREA CHOCUE y ALBA MARINELA SALÁZAR**, producto de la detención injusta e ilegítima que sufriera la

señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR por la conducta punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO.

Segundo. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR el equivalente a CIEN (100 S.M.L.M.V) al momento del pago efectivo, más intereses e indexación, por perjuicios morales.**

Tercero. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR el equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.M.V) al momento del pago efectivo, más intereses e indexación, por concepto de daño de vida de relación.**

Cuarto. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a los señores **JOHAN CAMILIO PEREA PEREA, SHARON MANUELA MONTOYA PEREA, GERMÁN QUINTERO ARCILA, ALEIDA MARÍA SALÁZAR JURADO, MIGUEL FERNANDO PEREA SALÁZAR, ROBERTH ANDRÉS PEREA SALÁZAR, PABLO ANDRÉS PEREA CHOCUE y ALBA MARINELA SALÁZAR, para cada uno de ellos el equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.M.V) al momento del pago efectivo, más intereses e indexación, por concepto de perjuicios morales.**

Quinto. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como reparación del daño antijurídico ocasionado a pagar a la señora **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR**, la suma que resulte de cuantificar el tiempo que estuvo detenida por el punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, por el salario que devengaba como comerciante equivalente a DOS MILLONES DE PESOS MENSUALES (\$2.000.000.00), más el veinticinco por ciento (25%) de las prestaciones sociales, debidamente indexados, por concepto de perjuicios materiales.

Sexto. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como reparación del daño antijurídico ocasionado a pagar a la señora **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR** la suma el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel¹, esto es, 8.75 meses multiplicado por el salario que devengaba para la fecha de su captura, debidamente indexada, por concepto de perjuicios materiales.

Séptimo. La condena respectiva será indexada, actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 inciso final del C.C.A (Ley 1437 de 2011), aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor,

¹ Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011. Expediente 19.502.

desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo y su pago efectivo por la entidad condenada y de conformidad con las fórmulas que para el efecto ha establecido o establezca el Honorable Consejo de Estado.

Octavo. Se condene en costas a la parte demandada conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

HECHOS Y OMISIONES

1. La señora **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR** convive con el señor **GERMÁN QUINTERO ARCILA** desde hace más de cinco años, de esa unión no procrearon hijos. La señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR tiene dos hijos SHARON MANUELA MONTOYA PEREA de cinco (5) años y JOHAN CAMILO PEREA PEREA.
2. La señora **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR** se desempeñaba para la fecha de su detención, como comerciante de ropa, calzado y productos agrícolas, devengando en promedio DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.00) mensuales.
3. El 11 de Marzo de 2011 la Fiscalía 15 Especializada de Cali – Valle del Cauca, presentó escrito de acusación por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO en contra de la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR.
4. El 21 de Marzo de 2014 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca, mediante sentencia No. 021 decidió ABSOLVER a la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR, por el punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, providencia que fue confirmada a través de la sentencia fechada el 25 de Noviembre de 2014, proveniente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga Sala de Decisión Penal, Magistrado Ponente doctor ALVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

DAÑO ANTIJURÍDICO COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que le sean imputables. En consecuencia, es necesario dilucidar en cada caso concreto si se configuran los elementos previstos en esta norma para que

nazca el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al demandado.

LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, con el actuar de sus funcionarios, incurrió en responsabilidad por lo que debe responder patrimonialmente al serle imputable el daño antijurídico que la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR y su familia, no estaba en el deber jurídico de soportar, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, artículo 140 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la ley 270 de 1996 y demás normas concordantes y aplicables.

La responsabilidad de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL y LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se manifiesta claramente toda vez que la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR, permaneció privada de la libertad durante más de dos (2) años, como consecuencia de la detención preventiva que se le impuso en el proceso penal que se adelantó en su contra por la presunta comisión del punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO.

Para la fecha en la cual el demandante sufrió la privación de la libertad, las fuentes normativas relacionadas con la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio judicial lo eran la Constitución de 1991, que estableció la responsabilidad patrimonial del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y el decreto 2700 de ese mismo año Código de Procedimiento Penal, que regulo dos supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad: a) El derecho a la reparación de perjuicios derivados del error judicial como consecuencia de la decisión que exonera de responsabilidad penal en el proceso de revisión (art. 242) y b) El derecho a la indemnización por detención preventiva cuando se dicta sentencia absolutoria o su equivalente en la que se concluya que el hecho no existió, el sindicado no cometió el delito o la conducta no constituía hecho punible (art. 414) Y LA LEY 270 DE 1996, estatutaria que específicamente reguló este tema de responsabilidad y que es aplicable en la situación de la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR (subrayas fuera de texto).

La posición actual del Honorable Consejo de Estado², acerca de la responsabilidad extracontractual del Estado por la privación injusta de la libertad teniendo en cuenta la aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y la Ley 270 de 1996, es la siguiente:

“

(...)

2.4. – Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la privación de la libertad a la cual es sometido el sindicado en cuyo favor, posteriormente, se profiere sentencia absolutoria o pronunciamiento judicial equivalente a ella.

2.4.1. – Responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal.

La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal³. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha sido puesto de presente⁴.

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de

² Sentencia del 25 de Febrero de 2009. Sección Tercera. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Demandante: Edgar Antonio Silva y Otros. Expediente: 25000232600019981585101.

³ El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463.

establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo⁵. Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas debían soportar⁶.

Más adelante, en una segunda dirección, la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios –carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad– fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal⁷, pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta⁸, lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio⁹.

En tercer término, tras reiterar el carácter injusto dado por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo¹⁰, reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa¹¹.

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente número 9734.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.

⁷ Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querrela de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.

⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2.002, expediente número 13.606.

¹¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601. En similar dirección, la Sala ha afirmado: “No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación dentro del proceso penal respectivo del principio *in dubio pro reo*, de manera tal que no obstante haberse producido la privación de la libertad como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso habiendo sido proferida la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales el imputado no llega a ser condenado porque la investigación es dudosa e insuficiente para condenar el imputado, circunstancia que hace procedente el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento¹²–.

Las decisiones que han establecido que el Estado debe responder cuando se configure alguna de las causales del artículo 414 del C. de P. C., sin que sea necesario cuestionar la conducta del funcionario que impuso la respectiva medida de aseguramiento de privación de la libertad, incluso en los casos en que se ha absuelto al detenido por *in dubio pro reo* –todo bajo un régimen objetivo de responsabilidad– han estado fundamentadas en la primacía del derecho fundamental a la libertad, la cual debe ser garantizada en un Estado Social de Derecho como lo es el Estado Colombiano por virtud de lo dispuesto en la Constitución Política. En relación con este aspecto, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una

licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601. En línea similar también puede verse: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2.007); Radicación No.:20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación– Rama Judicial.

carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas ...

“Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general ...

“De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder¹³ y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto¹⁴. No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798¹⁵, en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

“«Artículo 2. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión» ...

“Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de Derecho.

¹³ Sobre el punto, véase DE ASIS ROIG, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

¹⁴ SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, *Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introducción*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, p. 375.

¹⁵ Se toma la cita de la transcripción que del texto de la Declaración efectúa FIORAVANTI, Maurizio, *Los derechos fundamentales...*, cit., p. 139.

“Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos en aras de garantizar la protección de dicho derecho, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. C., o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo –sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima– el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo privó del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad.

2.4.2. El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado por el hecho de la privación de la libertad ordenada por autoridad competente, tras la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1.996.

El presente proceso ofrece la particularidad de que durante el lapso en el cual tuvo lugar la privación de la libertad de los señores Edagar Borja, Ismael Cruz, Juan Carlos Hidalgo y José Robinson Silva ocurrió un tránsito de legislación en cuanto tiene que ver con la regulación que, a nivel de derecho positivo, se efectúa de la responsabilidad del Estado derivada de la detención preventiva ordenada dentro de una investigación penal.

Es así cómo la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia –la cual entró en vigencia el 15 de marzo del citado año–, norma que regía cuando los señores antes mencionados fueron dejados en libertad, contiene unas disposiciones relacionadas con el tema que vendrían, en principio, a sustituir la regulación del mismo efectuada por el antes aludido artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, norma que se encontraba vigente al momento en que los señores antes citados fueron privados de la libertad.

La Sala, en sentencia del 2 de mayo de 2001¹⁶, analizó la circunstancia anterior y definió la incidencia que la nueva normativa podía generar frente a la responsabilidad que se le imputa al Estado por la declaración injusta de la libertad, precisando que sobre el particular podrían adoptarse dos posturas.

La primera, señalaría que el referido artículo 414 del Decreto ley 2700 de 1991 puede entenderse procedente por la potísima razón de que la medida de aseguramiento fue dictada en plena vigencia de la norma en cuestión, la cual habría de regir por tanto con efecto retrospectivo para las situaciones jurídicas surgidas durante la época en la cual estuvo en vigor el precepto anotado, independientemente de que éste hubiere sido derogado mientras transcurría el período de pervivencia en el tiempo de dichas situaciones jurídicas, tal como ocurrió en el supuesto sub examine.

La segunda, indicaría que el presente asunto debería ser resuelto al amparo de lo establecido por la Ley 270 de 1996, en virtud del principio enunciado en el artículo 2° de la Ley 153 de 1887, de acuerdo con el cual la ley posterior en el tiempo prefiere, en su aplicación, a la anterior. Sin embargo, tras constatar el contenido de los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales prevén parámetros para resolver conflictos de leyes en materia contractual, el primero y entre normas de naturaleza procedimental, el segundo, se debe decir que dichas disposiciones no tienen aplicación en este caso, porque el asunto que se somete a consideración de la Sala y que se rige por las disposiciones de la Ley 270 de 1996 no guarda relación alguna con el ámbito de la responsabilidad contractual ni mucho menos puede sostenerse que se trata de preceptos de naturaleza procedimental. Igualmente habría de tenerse en cuenta que el criterio de la especialidad normativa prevista en la Ley 153 tampoco permite resolver el conflicto, habida cuenta que tanto el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, como los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996, en cuanto tienen que ver con la responsabilidad del Estado por el hecho de la “detención injusta”, regulan la misma materia.

Consecuencialmente, podría entenderse que el criterio que permite zanjar el asunto es el de la temporalidad, de acuerdo con el cual, como ya se ha dicho, procede resolver el caso con fundamento en la regulación contenida en la ley posterior, de suerte que el sub lite habría de fallarse a la luz de lo previsto por las disposiciones

¹⁶ Sentencia del 2 de mayo de 2001, expediente: 15.463

pertinentes de la Ley 270 de 1996. Esta Ley, por lo demás, tiene el carácter de Estatutaria, a lo cual se añaden las consideraciones de que bajo la vigencia de la nueva normatividad se formuló la demanda correspondiente, bajo el vigor de la misma se ha adelantado el juicio de responsabilidad en contra del Estado y, más importante aún, bajo la vigencia de dicha ley estatutaria se sucedieron en buena medida los hechos que sirven de fundamento a la demanda y bajo su imperio tuvo ocurrencia la consolidación del perjuicio cuya reparación se depreca.

Para resolver el asunto es necesario remitirse al artículo 68 de la Ley 270 de 1996, según el cual quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la correspondiente reparación de perjuicios. En relación con este precepto, sostuvo la Corte lo siguiente en la misma sentencia C-037 de 1996:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

“En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.

“Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible” (subraya la Sala).

En sentencia del 2 de mayo de 2007¹⁷, la Sala señaló que una lectura aislada del artículo 68 de la Ley 270, junto con las consideraciones tenidas en cuenta por la Corte Constitucional para declarar exequible el proyecto de dicha disposición, podría conducir a entender que la referida norma estatutaria habría restringido el ámbito de posibilidades dentro de las cuales sería posible declarar la

¹⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 201. Exp.: 15.463

responsabilidad del Estado por el hecho de la detención ordenada por autoridad judicial dentro de una investigación penal, a aquellos casos en los cuales tenga lugar “una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”, es decir a supuestos en los cuales se acredite una falla del servicio de Administración de Justicia de las características descritas por la Corte en el apartado que se acaba de reproducir.

Sin embargo, tal conclusión no consulta la obligación del intérprete de buscar el sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como de la totalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, poniéndolas en contacto con aquellos preceptos de la Norma Fundamental que no pueden soslayarse al momento de precisar su contenido y alcance. En consecuencia, mal podría identificarse el significado del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, prescindiendo de una hermenéutica sistemática con las demás normas de la misma Ley Estatutaria que regulan el objeto al cual ella se refiere o, peor aún, omitiendo conectarla con el artículo 90 constitucional, piedra angular del régimen de responsabilidad del Estado operante en Colombia desde que rige la Carta Política de 1991.

Teniendo en cuenta el criterio expuesto, la Sala concluyó, en la precitada sentencia, que para concretar el alcance del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 resulta imperioso conectarlo con el enunciado normativo contenido en el artículo 65 ibídem, de acuerdo con el cual “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”, norma que no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la Administración de Justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, como quiera que con ello conculcaría la regulación efectuada por el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de “daño antijurídico” en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal –siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública–.

No es viable, en consecuencia, considerar que un precepto contenido en una ley estatutaria pudiera restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Constitución. Al remarcarlo así, la propia Corte Constitucional no hace otra cosa que señalar que, más allá de las previsiones contenidas en la comentada Ley 270 de 1996, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, **mas no limitados**, por una norma infraconstitucional. El anterior aserto encuentra refuerzo adicional en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el cual, desarrollando el querer del plurimencionado artículo 90 constitucional, amplía el plexo de hipótesis en las cuales puede declararse la responsabilidad del Estado derivada de la función de Administración de Justicia, al estatuir que “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 referida a la calificación de injusta de la privación de la libertad y el alcance que la Corte Constitucional le ha dado a la norma no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los cuales el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como de los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo

de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996.

En definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquél contiene. Partiendo de la conclusión anterior, la Sala determinó que en el artículo 90 de la Constitución Política tienen arraigo, aún después de la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996, todos los supuestos en los cuales se produce un daño antijurídico imputable a la Administración de Justicia que no están contemplados —más no por ello excluidos, se insiste en el premencionado artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia—, entre ellos, como en los eventos en los cuales se impone a un ciudadano una medida de detención preventiva como consecuencia de la cual se le priva del ejercicio del derecho fundamental a la libertad pero posteriormente se le revoca tal medida al concluir que los aspectos fácticos por los cuales el investigado fue detenido no constituyeron hecho delictuoso alguno, supuesto que estaba previsto en el artículo 414 del C. de P. P., y que compromete la responsabilidad de la Administración, pues con su actuación causó un daño antijurídico consistente en la privación de la libertad en contra de quien no cometió el hecho delictuoso imputado, circunstancia que torna injusta la medida y que debe ser reparada por la autoridad que produjo el hecho.

En este sentido, la Sala, en sentencia del 26 de marzo de 2008¹⁸, precisó:

“3. Visto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad que se discute en este proceso, ocurrió entre el primero de octubre de 1996 y el 30 de octubre de 1997, cuando había entrado a regir la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, promulgada el 15 de marzo de 1997, y en cuyo artículo 68 se establece: “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”
...

“Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente¹⁹, se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva,

¹⁸ Sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16.902. M.P.: Dr. Enrique Gil Botero.

¹⁹ Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, expediente: 15.463

también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo.

“De acuerdo con los principios tutelares del Estado Social y Democrático de Derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, dado que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna²⁰”.

Partiendo de los principios de legalidad, buena fe, primacía de la realidad, presunción de inocencia, in dubio pro reo, y que en el caso en cuestión para mi poderdante está CLARAMENTE PROBADO DENTRO DEL PROCESO QUE NO COMETIÓ LA CONDUCTA PUNIBLE ENROSTRADA POR LA FISCALÍA y teniendo en cuenta la interpretación de los postulados jurisprudenciales transcritos, se evidencia que la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR, al haber sido injustamente privada de la libertad tiene derecho a obtener sin duda alguna, la reparación de los daños que la misma le ha

²⁰ Ver también sentencia proferida por la Sala el 23 de abril de 2008, expediente 17.534. M.P.: Dr. Enrique Gil Botero, en la cual se concluyó:

“i) Las hipótesis establecidas en el artículo 414 del C.P.P. de 1991 (decreto ley 2700) mantienen vigencia para resolver, de manera objetiva, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones injustas de la libertad, en las cuales se haya arribado a cualquiera de las conclusiones a las que hace referencia la citada disposición, inclusive, con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la Corporación ...

“v) En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y específicos en los cuales la jurisprudencia –con fundamento en el principio iura novit curia, ha aceptado la definición de la controversia a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no juega un papel determinante para la atribución del resultado. Por el contrario, las demás situaciones que desborden ese específico marco conceptual, deberán ser definidas y desatadas a partir de la verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal”.

causado, reparación que se deriva de la antijuridicidad del daño, que le es imputable al Estado, en los términos del artículo 90 de la Carta Política, toda vez que estas normas sin excepción alguna comprenden las actuaciones de todas las autoridades del Estado, y por ende de la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación.

Como se advierte, la motivación de la sentencia absolutoria se fundamentó entre otras razones en que no existió prueba que permitiera pregonar con la certeza que demanda la ley, que la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR, haya participado en la comisión de la conducta que se le imputó por parte de la Fiscalía General de la Nación, y no porque haya habido duda al respecto, sino porque no existía dentro del proceso prueba alguna en contra del procesado que pudiera demostrar su responsabilidad en las conductas punibles mencionadas.

Por cualquiera de las razones aducidas en la providencia hoy ejecutoriada, hay lugar a afirmar que la hoy actora, nunca incurrió en la comisión de una conducta punible, por lo tanto, tiene derecho a que se le indemnice por los perjuicios materiales e inmateriales que le causó la privación injusta de la libertad a la que fue sometido, cuando la regla general el Derecho Penal, es la Libertad, y no la privación de la misma que es la excepción extrema a dicha regla.

En consecuencia, está probado que la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR, sufrió un daño antijurídico (calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carezca de causales de justificación), imputable a la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación, que da lugar a la reparación de los perjuicios materiales y extra patrimoniales que sufrió y los perjuicios extra patrimoniales, que conjuntamente también sufrieron **JOHAN CAMILIO PEREA PEREA, SHARON MANUELA MONTOYA PEREA, GERMÁN QUINTERO ARCILA, ALEIDA MARÍA SALÁZAR JURADO, MIGUEL FERNANDO PEREA SALÁZAR, ROBERTH ANDRÉS PEREA SALÁZAR, PABLO ANDRÉS PEREA CHOCUE y ALBA MARINELA SALÁZAR.**

Como ya se dijo, la Constitución Nacional prevé en el art. 90 que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En este caso – la responsabilidad patrimonial del estado, por “Error Judicial” permite ahora a mi poderdante, acudir ante la justicia contenciosa administrativa para que a través del

Medio de Control y pretensión de Reparación Directa, reclame del Estado, el pago de las sumas de dinero que se le deberán liquidar a su favor, como indemnización de perjuicios por el proceso penal que debió soportar injustamente, a causa de la falla de la administración de justicia en cabeza de varios de sus funcionarios.

Uno de los fundamentos para aceptar la responsabilidad del estado por una deficiente administración de justicia es la Falla del Servicio Público, al igual que ara las demás actuaciones del Estado por las que debe responder; si se tiene en cuenta que sus obligaciones se basan fundamentalmente en la protección de la vida, honra y bienes de los asociados, para asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales tanto del Estado mismo como de los particulares, es apenas obvio considerar, que de mediar un incumplimiento para llevar estos fines a la realidad se derive como consecuencia la responsabilidad el ente, entendiendo que estos fines constituyen una obligación latente y no un mero enunciado filosófico.

La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema ampliamente, y con fundamentos legales claros tanto de la anterior Constitución, como de esta, ha llegado a la conclusión anotada. Ver Sentencias del Consejo de Estado.

SECCION TERCERA SUBSECCION a Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012) Radicación número: 73001-23-31-000-2000-01402-01(22701) Actor: SECUNDINO MORA PATIÑO Y OTROS Demandado: NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12076 y Sentencia de 20 de febrero de 2008, exp.15980. Sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes números 13232 y 15646, Consejero Ponente Doctor Alir Eduardo Hernández Enríquez.

Expediente 85001 23 31 000 1999 0351 (23381) de 2011, 2012-02-08. NUEVAMENTE LA FISCALÍA RESPONDE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EN ESTE CASO DE UN CIUDADANO VINCULADO “IRREGULARMENTE” A INVESTIGACIÓN PENAL. Analizados los elementos de prueba aportados, la Sala encontró acreditado que la actuación de la Fiscalía constituyó el factor determinante para que la privación de la libertad del ciudadano resultara injusta, pues pese a las inconsistencias con la identidad del presunto autor del delito de estafa, la Fiscalía profirió orden de captura.

Modifica M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Documento Disponible al Público en Marzo de 2012. Temas: Principio Universal de Presunción de Inocencia. Prisión Arbitraria. Daño Antijurídico.

Si bien es cierto que la falla del servicio como fundamento de responsabilidad estatal, no exige de parte del afectado la identificación particular del agente que causó el perjuicio, pero cuando se alega no se presume ni la responsabilidad ni la culpa lo que obliga a probar que el servicio no funcionó de manera adecuada, funcionó tardíamente o simplemente no funcionó, y además que ese hecho causó un daño y que entre estos dos elementos existió relación de causalidad. Cuando se fundamenta la responsabilidad del Estado en la Falla del Servicio desaparece el problema de la culpa personal del funcionario y de esta manera se abre paso a una culpa anónima en la prestación del servicio, también es cierto que en el caso que nos ocupa se cometieron errores en contra de la ciudadana MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR, pues no solo se le juzgó y condenó por un delito que no cometió, sino que además se le sometió al escarnio público al enfrentar un proceso penal, que no estaba en la obligación de soportar.

La obligación emerge directamente del nexo causal que existe entre la falla de la administración de justicia, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad que sin lugar a dudas no solo obligó a mi patrocinado a soportar una carga que no estaba en la obligación de soportar sino que al final de cuentas y tras una prolongada y angustiosa espera, sus derechos constitucionales al buen nombre, a la honra y a la dignidad se vieron afectados.

De lo anterior surge la obligación económica de la administración de justicia y de la Fiscalía General de la Nación de indemnizar los perjuicios causados y reparar el daño producido por la conducta de sus funcionarios en la persona de la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR.

Si el Estado es una unidad y todos sus órganos actúan por él, el fundamento de la responsabilidad debe ser igual para todos, por ello no podemos ver el tema de la responsabilidad que le corresponde al estado por el error judicial de manera aislada. La reparación en este caso se fundamenta simplemente en la justicia distributiva y si el estado comete un error por abuso, desvío o inacción cualquiera sea el órgano específicamente encargado de la función, debe responder por el no cumplimiento de sus obligaciones.

Tenemos, además de la falla del servicio y como fundamento a la responsabilidad del Estado por error judicial, el daño considerado en sí mismo, pues la administración debe actuar conforme a derecho y si en alguna oportunidad causa un daño (inclusive en lo referente a la justicia) que el ciudadano no está obligado a soportar, el Estado debe indemnizar para asegurar de esta manera que tanto los derechos fundamentales como los demás derechos de las personas deben ser respetados y en caso de no serlo ellos deben obtener un resarcimiento. Con base en esta proposición se tiende a la responsabilidad objetiva ya que la idea de culpa se convierte, en el fondo, en un criterio de imputación que traspasa los efectos del perjuicio del patrimonio de la víctima al de la administración.

El objetivo de la reparación del daño no se basa en la sanción de una ilegalidad o en el instituto de la culpa personal, sino en resarcir el perjuicio con el fin de cumplir con el objetivo de mantener a los administrados en situación de igualdad ante las cargas públicas que deben soportar, por lo cual la teoría de la responsabilidad se convierte en un sistema de garantías para los ciudadanos.

PRUEBAS

Solicito se tengan en cuenta las siguientes:

1. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR, JOHAN CAMILIO PEREA PEREA, SHARON MANUELA MONTOYA PEREA, GERMÁN QUINTERO ARCILA, ALEIDA MARÍA SALÁZAR JURADO, MIGUEL FERNANDO PEREA SALÁZAR, ROBERTH ANDRÉS PEREA SALÁZAR, PABLO ANDRÉS PEREA CHOCUE y ALBA MARINELA SALÁZAR.**
2. Declaración extrajuicio rendida ante la Notaria Segunda de Tuluá – Valle del Cauca por los señores MÓNICA VALDERRAMA LASSO y CONSUELO LASSO ALZATE, en la cual se corrobora la calidad de compañeros permanentes del señor GERMÁN QUINTERO ARCILA y la señora MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR.
3. Copia de la Sentencia fechada el 25 de Noviembre de 2014, proferida por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga – Valle del Cauca, magistrado ponente doctor ÁLVARO AUGUSTO NAVIA MANQUILLO, dentro del proceso radicado No. 11001-60-00-000-2011-00228-01.
4. Constancia de no conciliación expedida por la Procuraduría 60 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali – Valle del Cauca.

ANEXOS

Me permito acompañar los siguientes documentos:

1. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

La cuantía la estimo en cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tomando como base el máximo perjuicio moral solicitado para cada uno de los demandantes.

MANIFESTACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se han presentado demandas o solicitudes de conciliación relativas al reconocimiento y pago de los perjuicios morales y materiales causados a los señores **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR, JOHAN CAMILIO PEREA PEREA, SHARON MANUELA MONTOYA PEREA, GERMÁN QUINTERO ARCILA, ALEIDA MARÍA SALÁZAR JURADO, MIGUEL FERNANDO PEREA SALÁZAR, ROBERTH ANDRÉS PEREA SALÁZAR, PABLO ANDRÉS PEREA CHOCUE y ALBA MARINELA SALÁZAR**, producto de la detención injusta e ilegítima que sufriera la señora **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR** por la conducta punible por la conducta punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO.

COMPETENCIA

Es competente usted Señor Juez para conocer del asunto por ser la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca, el lugar donde fue aprehendida la señora **MÓNICA YULIETH PEREA SALÁZAR** y por ser la cuantía estimada en más de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, tomando como base el perjuicio moral más alto.

NOTIFICACIONES

1. **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL**

CALI: Carrera 10 No. 12-15 Piso 17 Palacio de Justicia. Teléfono: 8898721.

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Juliana Álvarez Muñoz

Abogada Especializada - Derecho Administrativo



2. **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL CALI:** Calle 25 No. 6ª-11 Barrio Santa Mónica Residencial Teléfono: 3927505 Cali – Valle del Cauca. dirfiscal@fiscalia.gov.co
3. **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO:** Calle 70 No. 4-60 Teléfono: 2558955 Bogotá D.C. mesaayuda@defensajuridica.gov.co
4. **EL DEMANDANTE Y SU APODERADA JUDICIAL:** Calle 3 No. 5-41 Edificio Jireth Oficina 401 de Buenaventura – Valle del Cauca. Teléfono: 24003039-3003053760. Email: medusa323@hotmail.com.

Del Señor Juez.

Atentamente,

JULIANA ÁLVAREZ MUÑOZ

C.C. 41.948.710 de Armenia – Quindío

T.P. 189.178 del C.S.J.



Juliana Álvarez Muñoz

Abogada Especializada - Derecho Administrativo

